

Estrategia país: Sudán

2025-2028



Fundación
Mainel

solidaridad y cultura transformadoras



Actualizada el 30 de enero de 2026

ÍNDICE

Contenido

Contexto Africano	2
Sudán	2
Geografía	3
Política	4
Economía	8
Sociedad	10
Educación	12
Cultura	13
Salud	16
Estrategia	18
Objetivos generales	19
Líneas de actuación prioritarias	19
Socios locales	21
Instrumentos de seguimiento y evaluación	22

Contexto Africano

África es un continente marcado por una gran diversidad cultural, étnica y lingüística, con una población joven que representa tanto una oportunidad como un desafío. La urbanización avanza rápidamente, provocando transformaciones sociales profundas y una creciente tensión sobre las infraestructuras urbanas. Al mismo tiempo, amplios sectores de la población siguen viviendo en condiciones de pobreza y con acceso limitado a servicios básicos como la educación, la salud y el transporte. Las desigualdades estructurales persisten, especialmente entre zonas urbanas y rurales, y entre diferentes grupos sociales.

En el ámbito educativo y cultural, se observa un esfuerzo por preservar las identidades tradicionales frente a la expansión de modelos educativos estandarizados y procesos de globalización cultural. La falta de infraestructura adecuada, especialmente en zonas rurales, limita el acceso equitativo a servicios básicos como la salud y la educación formal adecuada. A ello se suman los efectos del cambio climático, la inestabilidad política en algunas regiones y la dependencia económica de sectores informales. En este contexto, las iniciativas educativas, de cultura y de salud desempeñan un papel clave en la promoción de la cohesión social, el empoderamiento comunitario y la reducción de las desigualdades.

Sudán

Sudán, ubicado en el noreste de África, fue según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas el país más extenso del continente desde su independencia en 1956 hasta la secesión de Sudán del Sur en 2011. A lo largo de su historia reciente ha estado marcado por conflictos armados internos, muchos de ellos con un trasfondo étnico o religioso, que han causado un sufrimiento prolongado a la población civil, frecuentemente convertida en blanco directo de la violencia.

Lejos de ser una situación superada, el país enfrenta desde abril de 2023 una guerra civil a gran escala entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El conflicto, calificado en marzo de 2025 por la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia como “la crisis humanitaria más grande y devastadora del mundo”, ha dejado a millones de personas en situación extrema de vulnerabilidad, desplazamiento forzado y acceso limitado a servicios básicos, incluidos los de salud.

Informes de Amnistía Internacional documentan violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de ambos bandos, en un entorno marcado por una corrupción estructural

y falta de transparencia institucional. En 2024, Sudán ocupaba el puesto 170 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y, en 2025, el puesto 156 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa según Reporteros Sin Fronteras. Todo ello hace de Sudán un país opaco del cual para obtener información sea común tener que recurrir a estudios de organismos internacionales.

Geografía

Actualmente Sudán es el tercer país más grande de África con una superficie de aproximadamente 1,88 millones de km². Está situado en el noreste del continente y limita con Egipto al norte, el mar Rojo al noreste, Eritrea y Etiopía al este, Sudán del Sur al sur, la República Centroafricana al suroeste, Chad al oeste y Libia al noroeste. Esta posición geográfica le otorga una gran diversidad paisajística y estratégica en la región del Sahel y el Cuerno de África.

El territorio sudanés está dominado por llanuras y mesetas áridas, atravesadas por el río Nilo y sus principales afluentes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que se unen en la capital, Jartum. El Nilo constituye el eje hidrográfico y humano del país, siendo vital para la agricultura y la vida cotidiana. El clima es predominantemente árido y semiárido, con zonas desérticas en el norte (Desierto del Sahara) y sabanas en el sur. La escasez de agua, la desertificación y la degradación ambiental son desafíos importantes que afectan tanto a la población como a los servicios básicos, especialmente en contextos de conflicto como el que se vive actualmente.

En este sentido, cabe destacar que el conflicto armado ha gran escala que empezó el 2023 ha tenido un efecto catastrófico para la economía sudanesa. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2023 aproximadamente dos tercios de la población se dedicaban a la agricultura, pero el conflicto ha obligado a millones de agricultores a abandonar sus tierras y ha devastado las cadenas de suministro de productos agrícolas. También ha disparado el precio de los suministros. Ahora todo, desde los fertilizantes hasta la gasolina, es mucho más caro y, como resultado, afecta al acceso de la canasta y servicios básicos para toda la ciudadanía.

Esta destrucción y abandono de las áreas agrícolas se suma a una situación ya de por sí grave debido al cambio climático. El aumento de las sequías desde los años ochenta ha hecho disminuir el número de tierras aptas para la agricultura y ha aumentado la rivalidad entre agricultores y ganaderos por la gestión del agua, especialmente en las regiones del suroeste. En cuanto a los servicios básicos la realidad tampoco es positiva, pues han sido los más afectados durante el conflicto. Según la OMS hasta finales de 2025 se verificaron más de 200 ataques contra centros de salud.

En cuanto a su distribución geográfica, el país se encuentra dividido en 18 estados. El único estado con salida al mar es el Estado del Mar Rojo cuya capital, Port Sudán, constituye un enclave vital para el país. Su ubicación dentro de una de las mayores rutas comerciales del mundo lo convierte en la principal vía para el comercio exterior y la entrada de ayuda humanitaria. Además, debido a su ubicación alejada del conflicto esta ciudad ha servido en determinadas ocasiones como capital provisional de las fuerzas gubernamentales y como punto de reubicación de instituciones educativas y sanitarias.

Por su parte, el Estado de Jartum es la capital del país y, según los reportes multilaterales, ha sido la más afectada por la guerra hasta el 2025. Este también se considera, junto con el Estado del Mar Rojo, un territorio prioritario para la actuación de la Fundación Mainel por su relevancia, extensión y necesidad de apoyo dentro del país. Jartum comprende las localidades de Jartum, Omdurman, Jartum Norte (Bahri), Jabal Awliya, Nilo Oriental, Karari y Ombada. Aunque su superficie es relativamente reducida, concentra funciones políticas, administrativas, económicas, educativas y sanitarias decisivas para el conjunto del país. Tras haber sido el principal escenario urbano de los combates iniciados en 2023, atraviesa desde 2025 una fase de posemergencia heterogénea en la que convive el retorno gradual de población e instituciones con infraestructuras dañadas, servicios esenciales insuficientes, riesgos de protección y restos explosivos de guerra. Esta combinación exige intervenciones flexibles, sujetas a evaluación continua de la seguridad y orientadas simultáneamente a la asistencia, la rehabilitación y la recuperación temprana.

En conclusión, la ubicación geográfica de Sudán, su riqueza hidrográfica concentrada en torno al Nilo, y su diversidad climática hacen del país un territorio estratégicamente crucial para el continente africano, pero profundamente vulnerable frente a crisis ambientales y conflictos armados. El conflicto ha agravado una situación precaria, provocando el colapso de servicios básicos lo cual compromete la seguridad y vida de millones de personas. Sin embargo, comprender plenamente los desafíos que enfrenta Sudán requiere de un análisis de su evolución en sectores como la política de los últimos tiempos.

Política

Sudán ha sido testigo de una historia marcada por profundas divisiones étnicas, conflictos armados prolongados y una lucha constante por el control del poder. Desde que obtuvo su independencia del Reino Unido y Egipto en 1956, el país ha vivido múltiples guerras civiles, golpes de Estado y episodios de violencia que han moldeado profundamente su panorama político y social. La herencia colonial dejó un Estado sin cohesión interna, dividido entre un norte mayoritariamente árabe-musulmán y un sur africano con creencias cristianas y animistas. Estas diferencias culturales, religiosas y socioeconómicas fueron rápidamente

politizadas por las élites del norte, que comenzaron a concentrar el poder político y los recursos económicos, marginando al sur y a otras regiones periféricas.

El primer gran conflicto estalló incluso antes de la independencia formal cuando la unificación administrativa reactivó tensiones, especialmente en el sur, donde se temía ser relegado por el poder central de la capital, Jartum. Esta percepción de exclusión y la imposición de una identidad árabe-islámica fueron factores clave que desencadenaron la Primera Guerra Civil Sudanesa, iniciada en 1955 y que se extendería hasta 1972. Fue en esencia una lucha por la autonomía regional frente a un centro que intentaba consolidar un modelo unitario de Estado.

El acuerdo de paz firmado en Addis Abeba en 1972 puso fin al conflicto al conceder cierto grado de autonomía al sur. No obstante, las tensiones permanecieron latentes debido al incumplimiento de varios aspectos del acuerdo entre ellos los referentes a la explotación de yacimientos petrolíferos. Finalmente, en 1983 el presidente Jaafar Nimeiri abolió la autonomía del sur y declaró la ley islámica en todo el país, lo que desató un nuevo conflicto conocido como la Segunda Guerra Civil Sudanesa.

Este nuevo conflicto, que se extendió hasta 2005, fue aún más devastador que el primero. Se calcula que murieron más de dos millones de personas y otros cuatro millones fueron desplazados. La guerra finalizó con los Acuerdos de Paz de Naivasha que establecieron un alto el fuego, autonomía reforzada para el sur, reparto de los ingresos petroleros y la celebración de un referéndum de independencia seis años después que dió como resultado la secesión de Sudán del Sur en 2011.

A la vez que transcurría la Segunda Guerra Civil Sudanesa el país estaba siendo transformado bajo el liderazgo de Omar al-Bashir, quien llegó al poder en 1989 mediante un golpe de Estado. Su gobierno, respaldado por islamistas, profundizó la islamización del Estado y reprimió violentamente a la oposición. En su mandato se intensificó el autoritarismo, la corrupción y la militarización del aparato estatal.

Uno de los episodios más oscuros de su régimen fue el conflicto en Darfur, que comenzó en 2003, cuando grupos rebeldes de la región occidental acusaron al gobierno de Jartum de marginación política y económica. La respuesta del Estado fue brutal: financió y armó a milicias árabes conocidas como janjaweed, que perpetraron masacres, violaciones y desplazamientos forzados. Se estima que más de 300.000 personas murieron y 2.5 millones fueron desplazadas. La comunidad internacional calificó estos actos como genocidio y, en 2009, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente Omar al-

Bashir por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, aún no ha sido detenido por dichos cargos.

Durante la década de 2010, Sudán enfrentó una crisis económica severa, agravada por la pérdida de ingresos petroleros tras la secesión del sur y las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. El descontento popular se incrementó progresivamente, y en diciembre de 2018 estallaron protestas masivas a raíz del aumento del precio del pan y del combustible. Estas manifestaciones, lideradas en gran parte por jóvenes, mujeres y organizaciones civiles, evolucionaron en un movimiento nacional que exigía la salida de Bashir. En abril de 2019, tras meses de presión popular y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, Bashir fue depuesto por un golpe militar.

El golpe de estado dió paso a un frágil proceso de transición democrática. Se estableció un gobierno civil-militar de transición encabezado por el primer ministro Abdalla Hamdok y el general Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano. Sin embargo, la coexistencia entre militares y civiles resultó problemática. Aunque inicialmente hubo avances, como la firma de acuerdos de paz con grupos rebeldes y el levantamiento de sanciones internacionales, las tensiones entre ambas facciones persistieron. En octubre de 2021, los militares, liderados por Burhan, disolvieron el gobierno de transición en un nuevo golpe de Estado, lo que desató nuevas protestas y una ola de represión que minó aún más la ya débil confianza en el proceso político.

La situación se deterioró aún más en abril de 2023, cuando estalló un conflicto armado abierto entre dos facciones militares rivales: las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el general Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia comandada por el general Mohamed Hamdan Dagalo. Ambos líderes habían sido aliados durante el gobierno de transición, pero las diferencias sobre cómo integrar a las RSF en el ejército regular y sobre el rumbo de la transición derivaron en una lucha por el poder. El conflicto estalló en Jartum, la capital, y rápidamente se extendió a otras regiones del país, como Darfur, Kordofán y el este.

La guerra ha tenido consecuencias catastróficas para la población civil. Según las Naciones Unidas en 2025, tras dos años de conflicto, miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas tanto interna como externamente, huyendo a países vecinos como Chad, Egipto y Sudán del Sur o regiones relativamente más seguras como el Estado del Mar Rojo. Es en la capital de este estado, Port Sudán, dónde se ha ubicado de forma temporal la capital hasta el 2025. No obstante, esta ciudad también fue bombardeada, incrementando las carencias en la situación en la ciudad y aumentando los problemas en el suministro de ayuda humanitaria en todo el país.

En Jartum, la evolución del control territorial desde 2025 ha permitido el retorno gradual de ministerios, universidades y parte de la población. Al 2026, mucha gente de Port Sudan y otros lugares está retornando a la capital de origen. Sin embargo, el retorno no equivale a recuperación: numerosas familias encuentran viviendas y medios de vida destruidos, redes de agua, saneamiento y electricidad deterioradas y servicios sanitarios con capacidad muy inferior a la demanda. Los informes del 2025 y 2026, impulsados por el socio local Comboni Collage of Science (CCST), señalan que alrededor de tres millones de residentes huyeron durante el conflicto y que aproximadamente dos millones de personas habían regresado posteriormente al Estado, en un escenario todavía marcado por retornos, desplazamientos internos masivos y necesidades humanitarias. Estas cifras se irán actualizando en cada identificación de proyecto debido a la elevada movilidad de la población y a las limitaciones de los sistemas estadísticos.

Aunque el conflicto va en desescalada oficial, las condiciones humanitarias aún son graves: hospitales destruidos, escasez de alimentos, falta de electricidad y un colapso de los servicios básicos. Las partes en conflicto han sido acusadas de cometer atrocidades, incluyendo asesinatos indiscriminados, violencia sexual y saqueos masivos. La coordinadora humanitaria de la ONU en el país, Clementine Nkweta-Salamin condenó la supuesta utilización de mujeres y niños como escudos humanos, así como la obstrucción de la ayuda humanitaria y la detención de civiles, incluidos niños. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de mediación por parte de la Unión Africana, las Naciones Unidas y potencias regionales como Egipto y Arabia Saudita, los combates no han cesado y no se vislumbra un acuerdo de paz cercano.

El conflicto también ha provocado una fragmentación del poder estatal. En muchas áreas, el control del gobierno central ha desaparecido y grupos armados locales, tribus y milicias han ocupado el vacío de poder. En regiones como Darfur, el conflicto actual ha reavivado las antiguas tensiones étnicas, resultando en episodios de violencia que recuerdan los peores momentos de la guerra de los años 2000. La lucha entre las SAF y las RSF no solo es una disputa entre dos hombres fuertes, sino el reflejo de una lucha estructural más amplia por el poder, la riqueza y la identidad nacional en un país marcado por décadas de exclusión, autoritarismo y militarización.

A pesar de la trágica situación actual, existen aún sectores de la sociedad civil sudanesa que mantienen viva la esperanza de una transición democrática. La comunidad internacional, por su parte, enfrenta el desafío de cómo apoyar a la población civil sin legitimar a los actores armados. En resumen, Sudán atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. El conflicto actual no solo ha devastado físicamente al país, sino que también ha socavado los frágiles avances hacia una gobernanza inclusiva. Resolver esta crisis requerirá no solo el cese inmediato de las hostilidades, sino una profunda reestructuración del Estado

sudanes, que garantice representación equitativa, justicia para las víctimas y una transición genuina hacia la democracia que sepa respetar las diversas culturas de su país.

Economía

La situación económica de Sudán ha sufrido un colapso drástico a raíz del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Antes del estallido de la guerra, el Banco Mundial estimaba el Producto Interno Bruto (PIB) del país en aproximadamente 109.000 millones de dólares. Sin embargo, la guerra ha interrumpido gravemente las cadenas de suministro, el comercio y los servicios básicos, provocando una contracción económica severa.

Uno de los efectos más visibles ha sido la inflación galopante, impulsada por la escasez de alimentos, combustible y bienes básicos, así como por la devaluación de la libra sudanesa. La inflación ha afectado transversalmente a todos los sectores productivos, elevando el coste de vida y erosionando el poder adquisitivo de la población, especialmente en áreas urbanas como Port Sudán y Jartum que, según el Displacement Tracking Matrix (DTM) de noviembre de 2024, ha absorbido gran parte de la población desplazada de otras regiones.

Además, en el caso de Jartum su recuperación económica está condicionada además por el saqueo y destrucción de negocios durante el conflicto, el desempleo, el encarecimiento del transporte y otros bienes esenciales, y la presión que el retorno poblacional ejerce sobre servicios todavía frágiles. Estas barreras económicas limitan el acceso efectivo a la salud incluso cuando los servicios vuelven a abrir, por lo que las intervenciones de Mainel deberán priorizar criterios transparentes de vulnerabilidad, asequibilidad y no discriminación, evitando que la capacidad de pago determine el acceso a prestaciones esenciales.

La deuda externa sigue siendo una carga significativa, superando los 56.000 millones de dólares para el 2025, con gran parte de ella en situación de impago desde los años 90. Aunque existían esfuerzos internacionales para aliviar esta deuda bajo la iniciativa HIPC (Países Pobres Muy Endeudados), el conflicto ha paralizado estos avances, dejando al país en una situación de asfixia financiera sin acceso a financiamiento multilateral o bilaterales tradicionales.

La economía sudanesa se sostiene principalmente sobre recursos naturales, destacando la producción agrícola, la extracción de petróleo, la extracción de oro (una de las principales fuentes de divisas), y las remesas enviadas por la diáspora sudanesa. Sin embargo, el comercio internacional del país está condicionado al Canal de Suez ya que este representa un 34 % de sus importaciones y exportaciones, lo que lo hace vulnerable a interrupciones en esta ruta marítima estratégica. A nivel diplomático, actores como China, Emiratos Árabes Unidos y

Rusia han aumentado su influencia. Este último país, como destaca el capitán de navío Abel Romero Junquera en su libro *La crisis del mar Rojo. Análisis desde una dimensión marítima*, busca establecer una base militar en Port Sudán, lo que subraya la importancia geopolítica del puerto y aumenta la complejidad del escenario internacional y la militarización del entorno.

El aumento del gasto militar, impulsado por la competencia entre las SAF y las RSF, ha venido a costa del gasto social. La mayoría de los fondos públicos se destinan ahora al financiamiento del conflicto, dejando sectores como salud, educación y servicios sociales prácticamente desfinanciados. En este contexto, la atención sanitaria y los cuidados paliativos están completamente desatendidos, particularmente en zonas costeras como Port Sudán y Jartum, donde se han refugiado cientos de miles de desplazados internos.

En aspectos más concretos la guerra impide obtener información precisa. Sin embargo, según el informe elaborado por el PNUD en noviembre de 2024 titulado “El impacto socioeconómico del conflicto armado en los hogares urbanos sudaneses”, se puede visibilizar que el empleo formal ha colapsado, y la mayoría de la población activa sobre todo jóvenes se ha desplazado hacia la economía informal, caracterizada por trabajos precarios, inestabilidad y ausencia de protección social. Asimismo, se ha registrado un repunte del trabajo infantil, sobre todo en actividades agrícolas, venta ambulante y minería artesanal, como estrategia de supervivencia ante la pérdida de ingresos familiares. Lo que se incrementa aun más si las condiciones educativas para mejores oportunidades laborales son escasas.

En cuanto a ingresos y distribución de la renta, el conflicto ha profundizado las desigualdades estructurales existentes. La población rural, sectores periféricos y más vulnerables han quedado excluidos de la economía formal.

Según la OIT en 2022 el 45,9% de las mujeres trabajaba en el sector agrícola frente a un 36,6% de los hombres que participaban en este sector. Esto ha dejado a las mujeres en una situación crítica ya que la agricultura ha sido uno de los sectores más golpeados por la guerra siendo objetivo constante de ataques y saqueos. Por otro lado, este mismo organismo afirmaba que, antes del estallido del conflicto, en el sector industrial trabajaban un 12,8% de los hombres respecto a sólo un 2,6% de las mujeres. Esto teniendo en cuenta el conflicto implica que los porcentajes pueden ser aún menores lo que implicaría la práctica desaparición de las mujeres del sector industrial. Además, sobre el empleo de las mujeres en sectores clave como la salud, los últimos informes realizados antes del Conflicto ya reportaban una baja representatividad de las mujeres dentro de este sector. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) indicaba que menos del 4% del empleo femenino se encontraba en el sector salud (2017). Lo que es paradójico porque al 2025, en primera línea de atención sanitaria directa como es la enfermería y cuidados paliativos, el personal sanitario más

representativo son las mujeres. Lo que puede reflejar la ausencia de formalidad en muchos espacios de empleo o la carga de las mujeres en este sector tan necesitado.

En definitiva, el conflicto ha venido a dañar una economía de por sí ya débil. Sudán es una economía dominada por un sector agrícola y un comercio exterior considerablemente dependiente del Canal de Suez. Es difícil obtener datos precisos de la situación actual, pero como han señalado en 2025 actores como UNICEF y ACNUR, ha habido un claro deterioro en las condiciones económicas del pueblo sudanés.

Sociedad

La sociedad sudanesa atraviesa un momento crítico, marcado por el deterioro profundo de las condiciones de vida como consecuencia directa del conflicto armado iniciado en abril de 2023, que ha aumentado las desigualdades históricas y ha debilitado aún más las estructuras sociales y comunitarias. Sudán, con una población estimada de 50 millones de personas, ocupaba en 2023 el puesto 176 de 193 países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Sudán, con un valor de 0,511, se sitúa en la categoría de desarrollo humano bajo. Esta cifra representa un estancamiento e incluso una leve disminución en comparación con los años anteriores, lo que refleja el impacto del primer año de conflicto, el deterioro institucional y el retroceso en los derechos y el bienestar de la población.

Una de las dimensiones más alarmantes del desarrollo humano en Sudán es la desigualdad de género. Ese mismo año el IDH ajustado por género mostraba una diferencia significativa: en los hombres tiene un valor de 0,542 frente al 0,441 para las mujeres. Esto implica una pérdida del 35,81 % del IDH debido a la desigualdad, reduciéndolo a 0,328. En términos del Índice de Desigualdad de Género (IDG), que mide las disparidades en salud reproductiva, empoderamiento y participación económica, Sudán presenta un valor de 0,588, ubicándose en el puesto 158 de 172 países evaluados y dentro del Grupo 5, el más desfavorecido.

Estas desigualdades se expresan no sólo entre géneros, sino también entre clases sociales, niveles educativos, regiones geográficas y grupos étnicos. Las mujeres, los hogares rurales, las minorías étnicas y las personas con menor nivel de educación enfrentan barreras mucho mayores para acceder a servicios esenciales, oportunidades económicas y participación en la vida pública. La fragmentación territorial y social ha sido una característica persistente en la historia reciente de Sudán, y el conflicto actual ha profundizado aún más estas divisiones.

El acceso a recursos básicos ha sido severamente afectado desde el inicio del conflicto. Según datos recientes del PNUD y otras agencias internacionales, la disponibilidad y calidad

de servicios fundamentales como saneamiento, electricidad, alimentación, educación y salud ha disminuido de forma drástica, especialmente en áreas urbanas que han recibido grandes flujos de población desplazada.

Se estima que más del 70 % de las personas desplazadas internas han buscado refugio en otras ciudades dentro del propio país, ejerciendo una presión enorme sobre unos servicios urbanos ya deteriorados. Port Sudán en un inicio y actualmente Jartum, vienen siendo las principales receptoras de refugiados debido a su importancia económica, sociopolítica y ubicación. Sin embargo, una parte de los refugiados, especialmente aquellos con un mayor nivel educativo o adquisitivo, han abandonado el país. Esta situación de “fuga de cerebros” viene a agravar las condiciones de vida en el país ante la carencia de médicos, maestros, ingenieros, etc.

Estos empleos no sólo son imprescindibles para cualquier país, sino que lo son aún más ante el deterioro de las condiciones de vida que supone el conflicto. Este deterioro lo podemos ver en el informe elaborado por el PNUD en noviembre de 2024 titulado “El impacto socioeconómico del conflicto armado en los hogares urbanos sudaneses”. En este informe podemos ver que el acceso al agua potable en zonas urbanas ha registrado una caída superior a 20 puntos porcentuales en el suministro de agua por red. A ello se suma que la fiabilidad del servicio eléctrico se ha visto gravemente comprometida: casi el 90 % de los hogares que anteriormente contaban con electricidad informan interrupciones severas o pérdida total del servicio. Esta interrupción de servicios esenciales agrava la vulnerabilidad de las poblaciones urbanas y pone de manifiesto la necesidad urgente de rehabilitación de infraestructuras críticas como condición previa para cualquier esfuerzo de recuperación sostenible.

Sin embargo, uno de los problemas más graves que atraviesa el país es la inseguridad alimentaria, educativa y sanitaria. Por un lado, el conflicto ha ocasionado un descenso importante de la producción agrícola lo que sumado a los cortes en las vías de suministro ha provocado graves problemas a la población para acceder a los alimentos. Según las Naciones Unidas a principios de 2025 más de 24,6 millones de personas en todo Sudán, más de la mitad de la población, sufren actualmente altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Esto incluye 8,1 millones en condiciones de emergencia y al menos 638.000 personas en condiciones de catástrofe.

De este modo, queda claro que Sudán atraviesa una crisis profunda y prolongada. A una situación ya precaria se ha sumado un conflicto devastador cuyo desenlace aún se vislumbra distante. La pobreza, el hambre y la inseguridad se han intensificado, afectando gravemente a una población que, en su mayoría, carece de acceso a servicios básicos como la educación y la salud, debido al grave deterioro de las infraestructuras provocado por la guerra.

Educación

El sistema educativo también ha sufrido un retroceso dramático. Según el informe del PNUD mencionado anteriormente, el 88 % de los hogares urbanos con niños y niñas en edad escolar reporta que al menos uno ha dejado de asistir a la escuela desde el inicio del conflicto. Más grave aún, en el 63,6 % de los casos, todos los niños en edad escolar del hogar han abandonado por completo la educación.

Este corte abrupto del proceso educativo tendrá efectos a largo plazo sobre la cohesión social, el capital humano y las oportunidades de futuro para toda una generación. Según el informe humanitario de UNICEF en marzo de 2025 se estimaba que más de 13.000 escuelas en todo el país permanecen cerradas, mientras que casi 2.900 escuelas están actualmente sirviendo como refugio para personas desplazadas internamente. Sumado a esto, muchas escuelas, especialmente instituciones de educación superior, se han trasladado a ciudades más seguras como Port Sudán para poder continuar con su actividad y al 2026 también muchas están retornando a Jartum.

De esta forma, miles de personas carecen de acceso a la educación debido al conflicto. Además, especialmente en la educación superior siguen existiendo barreras de tipo económico que repercuten en el acceso a la educación y el tipo de educación que reciben. Por un lado, muchos jóvenes no pueden pagar las tasas de acceso o los desplazamientos dejando la educación superior únicamente para aquellos más privilegiados económicamente. Por otro lado, el apartado práctico de la educación es también el que más recursos económicos requiere para poder adquirir los materiales. De esta forma, las personas con menos recursos carecen de acceso a la educación o solo pueden permitirse una de menor calidad. Esta situación dificulta al país reemplazar la mano de obra cualificada que ha huido o ha muerto a raíz del conflicto. También impide en gran medida el progreso de los grupos menos favorecidos creando así una barrera permanente.

Dentro de estos grupos menos favorecidos destaca la grave situación de las mujeres. Sudán es un país profundamente desigual y esto se plasma también en su sistema educativo. Según el informe “Índice de riesgos para la educación” de 2022 de Save the Children, Sudán era el segundo país del mundo, sólo superado por Afganistán, en riesgos para la educación de las niñas.

Toda esta situación de limitaciones en el acceso, falta de personas con estudios superiores y falta de infraestructuras educativas es especialmente grave en un país en el que, según el Banco Mundial, el Índice de Capital Humano en 2020 era de 0,4. Este índice mide el potencial económico que una persona puede alcanzar en función de las condiciones de salud y

educación en su país de origen siendo 1 el máximo. Es decir, que la guerra ha venido a dañar una situación de por sí ya negativa.

En definitiva, el conflicto en Sudán no solo ha generado una crisis inmediata, sino que también ha profundizado las desigualdades estructurales y ha puesto en grave riesgo el futuro del país al debilitar aún más su ya frágil sistema educativo. La combinación de cierres masivos de escuelas, desplazamientos, barreras económicas y desigualdades de género compromete el desarrollo del capital humano y perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión. Sin una intervención urgente, coordinada y sostenible, existe un alto riesgo de que se pierda toda una generación, con consecuencias irreversibles para la reconstrucción social y económica del país.

En Jartum, la recuperación del sistema educativo superior resulta además indispensable para restablecer el sistema sanitario. El retorno progresivo de organizaciones y entidades educativas como el Comboni College of Science a su sede original ofrece una oportunidad para reactivar la formación presencial en enfermería, las prácticas clínicas y la formación continua; no obstante, los daños y saqueos sufridos por instalaciones y laboratorios, la pérdida de equipamiento, el desplazamiento de docentes y estudiantes y las brechas de conectividad dificultan la recuperación. La estrategia apoyará, cuando las condiciones lo permitan, la rehabilitación segura de la capacidad clínica-formativa en Jartum; manteniendo en la medida de lo posible, modalidades flexibles que aseguren la continuidad educativa entre Jartum y Port Sudán.

Cultura

La historia reciente de Sudán refleja con claridad cómo los conflictos armados no solo han sido una constante en el país, sino que han estado profundamente atravesados por factores étnicos, religiosos y culturales. Desde la independencia de Sudán del Sur en 2011, se estima que el 97 % de la población sudanesa profesa el islam sunita, aunque existen minorías cristianas y comunidades musulmanas que siguen distintas interpretaciones del islam.

Sin embargo, a pesar de esta relativa homogeneidad religiosa en Sudán existen una gran cantidad de etnias y culturas. Esta pluralidad cultural a menudo ha sido foco de conflictos ante el centralismo y la incapacidad de las instituciones de gestionar la diversidad étnica. Ejemplo de esto son las dos guerras civiles sudanesas o el conflicto de Darfur que pasaron. En estos conflictos, el poder central trató de imponerse por la fuerza a las regiones periféricas sin respetar su identidad y autonomía.

Otro ejemplo lo tenemos en Port Sudán. Allí el gobierno para aumentar sus apoyos decidió contratar como personal sanitario a miembros de la etnia Beya, grupo con gran presencia en esa región, sin importar que estos tuvieran la adecuada formación. Esta situación ha provocado la pérdida de vidas humanas debido a las continuas negligencias. Además, gran parte de este nuevo personal sanitario no ha completado el certificado de finalización de la escuela secundaria y, por lo tanto, no pueden optar a títulos universitarios.

Por su parte, en Jartum es un crisol cultural donde conviven árabes sudaneses, nubios, Beya y diversas minorías regionales. Los jaaliníes y otros grupos de origen árabe representan el sector cultural y lingüístico dominante en la capital, seguidos por los históricos nubios asentados en el valle del Nilo. A ellos se suman comunidades desplazadas de Darfur, de las montañas de los Nuba y de regiones del sur de Sudán, configurando una población urbana diversa marcada por la migración interna y la historia del país.

En general, más allá de algunas prácticas de la mala gestión intercultural por parte de las instituciones, es necesario comprender la importancia de la cultura en aspectos tan importantes como la salud. En este sentido, cabe destacar la existencia de la medicina tradicional sudanesa, la cual tiene un largo recorrido en el país y en la actualidad está constituida por sanadores tradicionales. Son personas que practican la medicina basándose en la herencia, la experiencia, el conocimiento y la vivencia subjetiva. Si bien sus métodos no son comparables con la medicina moderna muchas veces son aquellos a los que la población acude, ya sea por raíces culturales o por no poder acceder a nada más.

En este orden, la tradición también tiene un gran peso en la gestión del dolor por parte de los sudaneses. Las interpretaciones sobre el significado del dolor o la enfermedad son diversas: castigo por los pecados cometidos, forma de redención o parte inevitable de la vida. En cualquier caso, estas visiones a veces repercuten en el bienestar de las personas que tratan de asumir el dolor en vez de buscar formas de eliminarlo.

Finalmente, los conflictos armados también suponen un grave riesgo para la cultura. Varios de los museos de la capital han sido saqueados y dañados durante los combates. Más allá de la incalculable pérdida que supone el expolio de estas piezas, algunas de ellas patrimonio de la humanidad, debemos plantear lo que implica para el país. Estos hechos implican no sólo destruir parte de su pasado sino acabar con herramientas útiles para la unión cultural y el desarrollo educativo.

En torno a la cultura de paz, La diversidad social de Jartum —población residente, retornada, desplazada interna y refugiada de distintas procedencias— exige que la acción sanitaria y educativa contribuya activamente a la cultura de paz. La prestación de servicios

deberá ser imparcial, inclusiva y culturalmente adecuada, evitar estigmatizaciones o privilegios basados en origen, etnia, religión, género o situación de desplazamiento, y generar espacios seguros de participación y diálogo. La salud y la educación se conciben así como bienes comunes capaces de reconstruir confianza, reforzar la convivencia y reducir tensiones en torno a recursos escasos.

Sobre la cultura de paz en Sudán se debe analizar en un contexto marcado por la prolongación del conflicto, el desplazamiento masivo, la fragmentación de las relaciones sociales y el deterioro de los servicios públicos. En **Jartum**, la destrucción de viviendas e infraestructuras, el retorno progresivo de población desplazada y la limitada capacidad de los servicios sanitarios, educativos, de agua y de electricidad pueden incrementar la competencia por recursos escasos y generar tensiones entre población retornada, desplazada y residente. En Port Sudan y posteriormente Jartum, la llegada de población interna y externa ha aumentado la presión sobre las viviendas, los hospitales y otros servicios esenciales, haciendo necesario fortalecer la convivencia entre las comunidades desplazadas y las comunidades de acogida. Naciones Unidas identifica precisamente como prioridades para la construcción de paz en el Estado la reducción de tensiones, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la cohesión social entre las personas desplazadas y las comunidades urbanas vulnerables que las acogen (Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, 2025). Asimismo, la OIM advierte de que los retornos se producen en zonas donde persisten graves daños en viviendas y servicios básicos, lo que exige vincular la recuperación material con la protección, la participación comunitaria y la prevención de conflictos (OIM, Plan de Respuesta a la Crisis de Sudán 2026).

Desde esta perspectiva, la cultura de paz no debe entenderse únicamente como ausencia de violencia, sino como la construcción de condiciones que favorezcan la convivencia, la confianza y el acceso equitativo a derechos y servicios. En Jartum y Port Sudan, ello implica aplicar criterios transparentes de selección de participantes, garantizar una atención sanitaria inclusiva y no discriminatoria, crear espacios de diálogo entre población desplazada, retornada y de acogida, establecer mecanismos seguros de quejas y promover la participación efectiva de mujeres, jóvenes y organizaciones comunitarias. La rehabilitación de servicios compartidos —como centros de atención primaria y espacios de formación sanitaria— puede actuar como un **conector social**, siempre que se aplique el enfoque de acción sin daño y se evite que la ayuda reproduzca desigualdades, privilegie a determinados grupos o alimente percepciones de exclusión. Este planteamiento coincide con las evidencias recogidas por el PNUD: las iniciativas locales de diálogo, mediación y protección impulsadas por organizaciones comunitarias, grupos juveniles, liderazgos religiosos y organizaciones de

mujeres han contribuido a reducir tensiones y reconstruir la confianza en distintas zonas del país (PNUD, Bridging Divides: Local Peace Initiatives in Sudan, 2025).

En conclusión, desde la mirada cultural, resulta imprescindible que cualquier estrategia de intervención humanitaria y desarrollo en Sudán incorpore una perspectiva cultural sensible y respetuosa de la diversidad étnica, religiosa y social del país. La cultura no puede ser vista como un elemento secundario, sino como un componente central en la construcción de sistemas de salud más inclusivos, eficaces y sostenibles. Solo así se podrá fortalecer el tejido social, reducir las tensiones históricas y avanzar hacia un modelo de desarrollo realmente equitativo y adaptado a la realidad plural de Sudán.

Salud

El conflicto armado en Sudán ha ocasionado el colapso de un sistema sanitario que ya de por sí era insuficiente. El sistema de salud, ya frágil y marcado por la falta de inversión, se encuentra ahora en una situación de colapso casi total. Según las Naciones Unidas en abril de 2025 el 80 % de los hospitales en las zonas afectadas por el conflicto estaban fuera de servicio, y a nivel nacional el 70% aproximado de los centros de salud ya no están operativos. Según el informe elaborado por el PNUD en noviembre de 2024 titulado “El impacto socioeconómico del conflicto armado en los hogares urbanos sudaneses” sólo uno de cada siete hogares urbanos puede acceder a servicios de salud completos.

Este deterioro ha generado una grave crisis de acceso a servicios esenciales. Según las publicaciones de Naciones Unidas mencionadas anteriormente, la mortalidad materna se ha disparado, y el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva se ve obstaculizado. En abril de 2025 la Dra. Hanan Balkhy, Directora Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, declaró que “Los hospitales se han quedado sin suministros; el personal sanitario está amenazado y muchos no cualificados... ahondado la problemática a que la enfermedad se propaga en zonas a las que apenas podemos acceder”. De esta forma, vemos como el escenario de crisis es crítico y se extiende por todo el país.

No obstante, esta crisis sanitaria no afecta a todos de forma uniforme sino que viene a agravar las desigualdades existentes. Según el Programa de Cirugía Global y Cambio Social (PGSSC) de la Facultad de Medicina de Harvard, en 2022 el 63% de la población se encontraba en riesgo de coste catastrófico en atención quirúrgica, es decir, más de la mitad de la población presentaba problemas para costear una posible intervención quirúrgica. Esta incapacidad para afrontar los costes médicos se habrá agravado durante la guerra ante la escasez de los mismos y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares desde el inicio.

Como reportan los informes multilaterales y del Ministerio de salud, el personal de enfermería también se encuentra desbordado. Este personal que es primera línea de atención en el sistema sanitario. En conclusión, la crisis sanitaria se ve agravada por motivos económicos pero también por motivos políticos y socioeducativos.

Más allá de esto podemos ver como los ataques contra instalaciones médicas y personal sanitario se han convertido en una práctica recurrente hasta el 2025. Esto fue documentado por ACNUR tras el primer año de conflicto en la región de Darfur dónde al menos 139 estructuras civiles fueron dañadas o saqueadas, entre ellas hospitales, escuelas y puntos de agua comunitarios. Algunos profesionales intentaron continuar su labor en clínicas improvisadas dentro de residencias privadas, pero incluso estas han sido blanco de violencia deliberada. En este contexto, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, pacientes crónicos o graves, quienes viven en zonas rurales o han sido desplazadas por el conflicto enfrentan condiciones extremas de vulnerabilidad.

En este panorama, Port Sudán y Jartum emergen como un enclave estratégico para la respuesta sanitaria. Se han consolidado como los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria, medicamentos, equipamiento médico y personal internacional. Estos factores han convertido estas ciudades en el punto de refugio de cientos de miles de desplazados por el conflicto, lo cual ha supuesto una gran presión para un sistema sanitario que ya era insuficiente.

No obstante, independientemente de la presión ejercida sobre el sistema sanitario, ya persistían otros desafíos extremadamente graves. El mayor problema es que una parte importante del personal sanitario ha sido contratado sin formación adecuada, como en el caso de los trabajadores de Port Sudán con la etnia Beya, lo cual ha derivado en negligencias y grandes riesgos para la salud pública. Esta situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer las capacidades técnicas del personal sanitario local y establecer mecanismos claros y equitativos de selección y formación continua.

La escasez de personal cualificado es especialmente crítica también en el Estado de Jartum. El desplazamiento, la migración, la violencia, el agotamiento y la interrupción de la formación han reducido la disponibilidad de enfermería, matronas, personal de urgencias y traumatología, anestesia y supervisión clínica. Las brechas afectan al triaje, la atención materno-neonatal, las heridas, las enfermedades transmisibles y crónicas, la salud mental y los cuidados paliativos. Por ello, la recuperación de la atención primaria debe ir unida al fortalecimiento de competencias, la supervisión y la reactivación de los laboratorios y prácticas clínicas de organizaciones del territorio.

En general, ciudades como Port Sudán o Jartum constituyen, una prioridad sanitaria ineludible. Los diagnósticos de organismos como Comboni Collage of Science evidencia una recuperación parcial y desigual en el país. Durante el periodo más intenso del conflicto una gran parte de los hospitales en Jartum quedó total o parcialmente fuera de servicio y, pese a las reaperturas iniciadas desde 2025, numerosos centros continúan dañados, saqueados, sin saneamiento, medicamentos o equipamiento suficiente. La oferta de atención primaria resulta insuficiente ante el retorno masivo de población y la permanencia de personas desplazadas, refugiadas y residentes vulnerables. La rehabilitación de centros de salud y de sistemas esenciales deberá basarse siempre en evaluaciones técnicas previas de seguridad estructural, accesibilidad, titularidad, costes, mantenimiento, agua y saneamiento, energía y riesgos de protección.

En conclusión, la crisis sanitaria exige una respuesta territorial complementaria. Port Sudán seguirá siendo relevante por su función logística, institucional y educativa, mientras que Jartum requiere una presencia estratégica creciente por la magnitud de los daños, el retorno poblacional, la insuficiencia de la atención primaria y la necesidad de recuperar la formación sanitaria con urgencia. La Fundación evitará plantear ambos territorios como opciones excluyentes: adaptará su actuación a la evolución del conflicto, la seguridad y el acceso humanitario, priorizando la vida, la dignidad, la protección y el fortalecimiento sostenible de capacidades locales.

Estrategia

El trabajo de la Fundación Mainel en Sudán se desarrollará junto con sus socios locales, Comboni College of Science and Technology (CCST), institución de educación superior y con hospicio de enfermería y cuidados paliativos. Es reconocida por los Ministerios competentes desde 2001 y con experiencia en formación sanitaria y atención a poblaciones vulnerables. Tras trasladar temporalmente buena parte de su actividad a Port Sudán para mantener la continuidad académica durante el conflicto, CCST está reanudando gradualmente su presencia en Jartum y sus programas presenciales, en particular la formación en enfermería. Estas actuaciones también se fortalecerán con el trabajo de la ONG Bitagdery, que tiene experiencia comunitaria en el territorio y un enfoque interseccional valioso para el ejercicio de las acciones tanto en Port Sudan como en Jartum. Además, la estrategia apoyará esta capacidad territorial dual y promoverá la colaboración académica con la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia cuando resulte pertinente. La formación, la rehabilitación de capacidades clínicas y el fortalecimiento de la atención primaria se

consideran pilares complementarios para responder a necesidades urgentes y favorecer la recuperación del sistema sanitario.

Esta estrategia se define para un periodo de cuatro años y tendrá como ámbitos prioritarios el Estado de Jartum y el Estado del Mar Rojo, con atención principal a Jartum y Port Sudán. La Fundación podrá actuar en otras zonas del país cuando las necesidades, la capacidad de CCST y Bitagdery, el acceso y las condiciones de seguridad lo justifiquen. En Port Sudán se mantendrá la atención a las presiones derivadas del desplazamiento y su papel logístico y formativo. En Jartum se reforzará progresivamente el trabajo de recuperación temprana, rehabilitación de atención primaria y restablecimiento de la capacidad clínica-formativa, en beneficio de población retornada, desplazada interna, refugiada y residente vulnerable. Las decisiones territoriales se revisarán periódicamente mediante análisis de necesidades, seguridad, protección, acceso, capacidades locales y complementariedad con otros actores.

Objetivos generales

El objetivo general de la estrategia es contribuir a proteger el derecho a la salud y la dignidad de la población afectada por la crisis en Sudán, mejorando el acceso seguro, asequible, inclusivo y de calidad a la atención primaria y fortaleciendo de manera sostenible las capacidades locales de formación y prestación sanitaria. Se prestará especial atención a mujeres y niñas, infancia, población retornada, desplazada o refugiada, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y en situación de vulnerabilidad general.

La estrategia contribuirá a reducir desigualdades, promover la igualdad de género, recuperar servicios e instituciones y generar capacidades y oportunidades profesionales, mediante un enfoque basado en derechos humanos y en los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Se alinea con la Agenda 2030, especialmente con los ODS 3, 4, 5, 8, 10, 16 y 17, y con las prioridades de la acción humanitaria de la Generalitat Valenciana: protección de la vida, la dignidad y los derechos; atención a crisis complejas y prolongadas; posemergencia, rehabilitación y reconstrucción; fortalecimiento de capacidades y resiliencia; localización; igualdad; participación y rendición de cuentas; y articulación entre acción humanitaria, desarrollo y construcción de paz.

Líneas de actuación prioritarias

La Fundación Mainel siempre aboga por la solidaridad, la cultura y la educación como herramientas de transformación. Los proyectos buscan la justicia social de las personas para que sean las responsables de su propio desarrollo y puedan contribuir a la aplicación efectiva

de los Derechos Humanos en su realidad. Por este motivo las líneas de actuación prioritarias son:

- Formación inicial y continua de personal sanitario, con énfasis en enfermería, urgencias, triaje, salud materno-neonatal, enfermedades transmisibles y crónicas, salud mental, rehabilitación y cuidados paliativos.
- Recuperación de la formación clínica de estudiantes del área de salud mediante laboratorios, prácticas seguras, tutoría y modalidades flexibles entre Jartum y Port Sudán.
- Fortalecimiento de las competencias del personal docente y de supervisión clínica, favoreciendo la transferencia de conocimientos y la sostenibilidad institucional.
- Rehabilitación y mejora sostenible de servicios de atención primaria e instalaciones clínico-formativas, incluyendo accesibilidad, agua y saneamiento, energía, equipamiento, mantenimiento y seguridad.
- Acceso equitativo y no discriminatorio a la atención, con criterios transparentes de vulnerabilidad y medidas específicas frente a barreras de género, edad, discapacidad, pobreza y situación de desplazamiento.
- Respeto de la diversidad cultural, religiosa y social y promoción de la cultura de paz, la cohesión comunitaria y la participación significativa de mujeres y otros grupos infrarrepresentados.
- Protección transversal de las personas afectadas, prevención de la explotación, , salvaguarda de la infancia y juventud.
- Participación comunitaria, información accesible, mecanismos de retroalimentación y quejas y rendición de cuentas ante la población afectada.
- Coordinación con autoridades sanitarias, universidades, organizaciones comunitarias y actores humanitarios para evitar duplicaciones, cubrir brechas y reforzar capacidades locales.
- Gestión de riesgos, preparación y adaptación continua a la evolución de la seguridad, el acceso humanitario, la movilidad poblacional y los riesgos ambientales y climáticos.

Para ejecutar nuestro trabajo en estas líneas de acción, la alineación con las prioridades de los socios locales actuales es fundamental para Mainel. Tal como indica nuestro Plan Estratégico 2023-2026, no buscamos una expansión a través de nuevos socios, sino seguir profundizando en nuestras alianzas existentes. Para ello, conservaremos nuestra política de contacto permanente, conocimiento de sus necesidades, oportunidades, y planificación conjunta.

La estrategia aplicará el enfoque de triple nexo de forma transversal. En su dimensión humanitaria, responderá a necesidades sanitarias urgentes y restablecerá servicios esenciales. En su dimensión de desarrollo, se tratará de rehabilitar capacidades, infraestructuras, equipamiento

y sistemas locales de formación, gestión y mantenimiento. En su dimensión de paz, promoverá acceso imparcial, participación inclusiva, confianza institucional, cohesión social y prevención de tensiones. Estas dimensiones no constituirán proyectos aislados, sino resultados complementarios de una misma lógica de intervención, con indicadores que midan acceso y protección, fortalecimiento de capacidades, resiliencia, participación y contribución a la convivencia.

La sensibilidad al conflicto y el enfoque de acción sin daño se incorporarán desde la identificación hasta la evaluación. Antes de cada intervención se analizarán actores, dinámicas de conflicto, conectores y divisores, riesgos de exclusión, posibles efectos sobre mercados y servicios y percepciones sobre la distribución de la ayuda. Se evitarán criterios que privilegien a un grupo por afiliación, procedencia o control territorial; se protegerá la confidencialidad de los datos; se establecerán canales seguros de quejas; y se revisarán periódicamente los efectos previstos y no previstos. Cuando se detecten daños potenciales, tensiones o barreras de acceso, se adaptarán la selección, las actividades, la comunicación y los mecanismos de coordinación.

La cultura de paz será una perspectiva explícita de la estrategia. La recuperación sanitaria y educativa deberá contribuir a reconstruir vínculos y confianza mediante servicios compartidos, inclusivos y no discriminatorios; diálogo entre población, profesionales e instituciones; comunicación respetuosa; prevención de discursos estigmatizantes; y participación efectiva de las mujeres, de acuerdo con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. La Fundación y CCST evitarán instrumentalizar la ayuda o legitimar a actores armados y velarán para que la asistencia preserve el espacio humanitario y apoye capacidades civiles.

Socios locales

La Fundación Mainel trabaja en Sudán con un socio local de máxima confianza. Este proceder permite fortalecer las instituciones locales, mediante el desarrollo de sus recursos humanos y su capacidad de gestión, así como garantizar la sostenibilidad del proyecto y el predominio de la entidad local en todas las acciones que desarrollamos.

La relación con CCST se guiará por el principio de localización o soberanía humanitaria. Con un liderazgo local en la identificación y ejecución, toma de decisiones compartida, fortalecimiento institucional, reconocimiento de costes y capacidades, transparencia y aprendizaje mutuo. CCST facilitará la participación de autoridades sanitarias, personal, estudiantes, organizaciones comunitarias y población afectada, sin sustituir la responsabilidad de las instituciones públicas ni comprometer los principios humanitarios.

La Fundación Mainel se especializa en la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos ante las instituciones donantes. Al mismo tiempo nuestro socio local se dedica a identificar las necesidades, elaborar propuestas de proyectos prioritarios y ejecutar aquellos ya

planificados. Nuestro socio local en Sudán es el ***Comboni College of Science and Technology (CCST)*** una institución educativa con más de 30 años de experiencia en el territorio y con un trabajo sostenible en formación superior técnica y profesional y en iniciativas sanitarias dirigidas a población vulnerable. Su sede histórica se encuentra en Jartum. Durante el periodo de mayor intensidad del conflicto trasladó actividades a Port Sudán y mantuvo formación teórica a distancia. En el actual contexto de recuperación, está retomando progresivamente su actividad en Jartum, sin renunciar a la capacidad desarrollada en el Estado del Mar Rojo. Esta implantación complementa, unida a su conocimiento del contexto, su red profesional y su interlocución con autoridades educativas y sanitarias, lo convierte en un socio estratégico para la recuperación de la atención primaria y de la formación de enfermería.

Su enfoque inclusivo y su experiencia en la formación de personal cualificado y atención sanitaria para colectivos vulnerables lo convierten en un socio estratégico para iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema sanitario en Sudán. En el marco de este proyecto, CCST aporta su infraestructura formativa, su red de profesionales locales y su conocimiento profundo del contexto sanitario y educativo del país. Su capacidad para adaptar los programas a las necesidades reales del entorno permiten garantizar una formación contextualizada, práctica, alineada con los retos actuales del sistema de salud sudanés y que pueda pervivir a los reveses del conflicto armado.

Instrumentos de seguimiento y evaluación

La realización de un proyecto no consta sólo de su planificación y ejecución sino que una parte fundamental del mismo es el seguimiento y evaluación que se hace del mismo a lo largo de toda la vida del proyecto. Este proceso es llevado a cabo tanto por la Fundación Mainel como por su socio local con el fin de recabar con veracidad toda la información posible.

El objetivo de este seguimiento a corto plazo es garantizar el correcto cumplimiento de las acciones planificadas y, en caso de ser necesario, solventar las incidencias de toda índole que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto. A largo plazo, el seguimiento y la evaluación del proyecto nos permitirá generar aprendizajes que hagan mejorar significativamente nuestras intervenciones.

El sistema de seguimiento procurará combinar el marco lógico de cada proyecto con una matriz específica de calidad humanitaria. Como mínimo, medirá: cobertura y acceso desagregados por sexo, edad, discapacidad y situación de desplazamiento; funcionalidad y sostenibilidad de servicios e infraestructuras; competencias y retención del personal; riesgos e incidentes de protección; satisfacción y percepción de seguridad; funcionamiento y respuesta de

los mecanismos de quejas; participación de la población; coordinación; efectos sobre cohesión social; y avances en las dimensiones humanitaria, de desarrollo y de paz.

El seguimiento y la medición de resultados combinarán indicadores cuantitativos y cualitativos, líneas de base cuando sean necesarias, fuentes verificables, consultas participativas y análisis de riesgos. Los datos personales se recopilarán únicamente cuando sean necesarios, con medidas de consentimiento, confidencialidad y protección. Debido a la volatilidad del contexto, se actualizarán periódicamente los análisis de seguridad, acceso, conflicto y protección y se documentarán las decisiones de adaptación.

Del mismo modo, también se recogerán de forma concisa aquellos aspectos que sean claves para la explicación de las situaciones que se han presentado a lo largo de la ejecución de los proyectos, tanto en sentido positivo como negativo. A la hora de dar una opinión y valorar la marcha del proyecto, hay varios aspectos importantes a tratar:

La apropiación y la rendición de cuentas ante la población afectada se valorarán mediante su participación real en la identificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. Cada intervención facilitará información clara y culturalmente adecuada sobre criterios, actividades y derechos; dispondrá de mecanismos confidenciales, accesibles y seguros para consultas, retroalimentación y quejas; registrará las respuestas ofrecidas; y demostrará cómo las opiniones de la población influyen en las decisiones. Se prestará especial atención a que mujeres, personas con discapacidad, población desplazada o refugiada y otros grupos con barreras puedan participar de forma segura y significativa.

Las revisiones periódicas identificarán fortalezas, debilidades, cambios contextuales, efectos no previstos y posibles impactos negativos. Se analizará si la intervención refuerza o debilita capacidades locales, si genera percepciones de trato desigual, si agrava tensiones o riesgos de protección y si mantiene la complementariedad con otros actores. Los hallazgos darán lugar a medidas correctoras documentadas, responsables y plazos de seguimiento.

En la medida de lo posible se deben sintetizar las recomendaciones prácticas extraídas de la experiencia en la ejecución del proyecto.

En conclusión, el seguimiento y la evaluación serán conjuntos, participativos y orientados a la rendición de cuentas y el aprendizaje. Las visitas sobre el terreno solo se realizarán cuando el análisis de seguridad y acceso lo permita, con protocolos claros de seguridad, evacuación y gestión de incidentes; cuando no sea posible, se combinarán seguimiento local reforzado y medios remotos seguros. Las evaluaciones revisarán los principios de protección de Esfera, la acción sin daño, el triple nexo y la cultura de paz, además de la eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto de cada intervención.